



Asamblea General

Distr. general
29 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones
(29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)**

Nº 38/2011 (República Árabe Siria)

Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de marzo de 2011

Relativa a: Tal Al-Mallouhi

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio con las debidas garantías, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III).

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Tal Al-Mallouhi, nacida en 1991 y residente habitual en Homs (Siria), donde vive con su familia, es una estudiante que tiene una bitácora en Internet que utiliza para publicar poemas y artículos. No milita en ningún partido político.

4. La Sra. Al-Mallouhi fue detenida el 27 de diciembre de 2009 tras haberse personado a raíz de una citación en la Sección 279 de los Servicios de Seguridad del Estado, en Damasco. Fue interrogada sobre su viaje a Egipto. La Sra. Al-Mallouhi fue recluida en régimen de asilamiento, sin poder mantener contacto alguno con el mundo exterior, y sin que se hubiese dictado ninguna orden judicial.

5. El 10 de noviembre de 2010, la Sra. Al-Mallouhi fue trasladada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Se informó a su familia de que se le imputaba un delito de "espionaje y de proporcionar información a un Estado extranjero", y de que se encontraba presa en la cárcel de Duma, cerca de Damasco.

6. El 14 de febrero de 2011, la Sra. Al-Mallouhi fue juzgada por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y condenada a cinco años de prisión. Según la información recibida, el juicio se celebró a puerta cerrada y no se le permitió acceder a un abogado. Tampoco pudo disponer de los medios necesarios para preparar su defensa ni consultar a un abogado de su elección. Además, contra la resolución del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que es una jurisdicción de excepción, no cabe recurso.

7. La fuente sostiene que la detención y reclusión de la Sra. Al-Mallouhi es un ejemplo de la presunta política de las autoridades de acallar toda crítica al Gobierno. La reclusión de la Sra. Al-Mallouhi es consecuencia de su actividad en su bitácora, que utilizaba para debatir diversos temas y publicar poemas.

Respuesta del Gobierno

8. El Grupo de Trabajo remitió sendas comunicaciones al Gobierno el 11 de marzo de 2011 y el 10 de junio de 2011 y lamenta que el Gobierno no haya proporcionado la información solicitada. El Grupo de Trabajo habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno.

Deliberaciones

9. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo entiende que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos sobre la base de las informaciones recibidas.

10. En el presente caso, cabe preguntarse ante todo si la privación de libertad es resultado del ejercicio de los derechos y libertades que se reconocen en el artículo 19 de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

11. El Grupo de Trabajo ha examinado la relación entre la privación de libertad de la Sra. Al-Mallouhi y el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión. La fuente sostiene que su reclusión es consecuencia directa del ejercicio de ese derecho y no obedece a otros motivos. El Grupo de Trabajo no ha recibido ninguna información del Gobierno que pueda refutar las afirmaciones de que se han vulnerado las garantías en materia de derechos humanos consagradas en el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Dado que el Gobierno no ha cuestionado los indicios racionales de criminalidad, el Grupo de Trabajo no puede más que colegir que la privación de libertad de la Sra. Al-Mallouhi supone una restricción injustificada del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión. Por ello, esta medida de privación de libertad se inscribe en la segunda de las categorías establecidas para examinar los casos presentados al Grupo de Trabajo.

12. Además, el Grupo de Trabajo observa con preocupación que la Sra. Al-Mallouhi fue recluida en régimen de aislamiento, sin contacto alguno con el mundo exterior y sin ningún tipo de orden judicial. Su reclusión desde el 27 de diciembre de 2009 hasta su puesta a disposición del juez, el 14 de febrero 2011, es un incumplimiento manifiesto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A ello, cabe sumar las infracciones que suponen la denegación de acceso a un abogado y de los medios necesarios para preparar su defensa. El Grupo de Trabajo reitera que la jurisdicción militar y excepcional del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, ante cuyas resoluciones no cabe recurso, no respeta las debidas garantías procesales.

13. El Grupo de Trabajo invariablemente ha dictaminado que el recurso a la jurisdicción militar en este tipo de casos supone un incumplimiento de obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos (véase, por ejemplo, la Opinión N° 27/2008). En sus observaciones finales sobre la República Árabe Siria, el Comité de Derechos Humanos declaró que seguía "preocupado por las numerosas denuncias de que los procedimientos de los tribunales militares no respetan las garantías previstas en el artículo 14 del Pacto" (CCPR/CO/71/SYR, párr. 17). En sus observaciones finales sobre el informe inicial de Siria, el Comité contra la Tortura expresó "su profunda preocupación por las numerosas, concordantes y graves alegaciones según las cuales ese Tribunal no funciona de conformidad con las normas judiciales internacionales" (CAT/C/SYR/CO/1, párr. 11). El Comité añadió que el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado tenía "la facultad de establecer penas e imponer sanciones penales por delitos que están definidos en términos muy amplios" (*ibid.*). Por último, en su Observación general N° 32 (2007) relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia el Comité de Derechos Humanos reafirmó que las garantías del artículo 14 son aplicables a las jurisdicciones ordinarias y especiales de carácter civil o militar (CCPR/C/GC/32, párr. 22).

14. La medida de privación de libertad impuesta a la Sra. Al-Mallouhi viola los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así pues, esta medida de privación de libertad se inscribe en la tercera de las categorías establecidas para examinar los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. Toda vez que la medida de privación impuesta a la Sra. Al-Mallouhi vulnera las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el remedio principal es su inmediata puesta en libertad. Asimismo, le debe asistir el derecho efectivo a ser indemnizada, en virtud del artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es una expresión de principios generales. Las razones esgrimidas para privar de libertad a la Sra. Al-Mallouhi no pueden aducirse también para denegarle una indemnización.

16. El Grupo de Trabajo señala, además, que esta es solo una de las varias opiniones del Grupo de Trabajo en que considera que la República Árabe Siria incumple las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos (véanse, por ejemplo, las opiniones Nos. 1/2011, 26/2011 y 37/2011). El Grupo de Trabajo recuerda a la República Árabe Siria que debe cumplir las obligaciones internacionales que tiene contraídas en materia de derechos humanos de no privar arbitrariamente a nadie de su libertad, poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente y procurarles una indemnización. La obligación de acatar las normas internacionales de derechos humanos no solo incumbe al Gobierno, sino a todos los funcionarios, incluidos los jueces, los policías, los agentes de seguridad y los agentes penitenciarios competentes. Nadie puede contribuir a que se violen los derechos humanos. El Grupo de Trabajo también destaca la responsabilidad derivada de la privación arbitraria de la libertad cuando constituye un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional consuetudinario.

Decisión

17. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Tal Al-Mallouhi es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la República Árabe Siria que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Tal Al-Mallouhi, entre las que figurarían su inmediata puesta en libertad y la concesión de una indemnización.

[Aprobada el 1º de septiembre de 2011.]
